


OPINIÓN

La reforma fiscal: radiografía del poder

Por Pablo Cabañas Díaz ▶ 3

OPINIÓN


 POR PABLO
CABAÑAS DÍAZ

La reforma fiscal: radiografía del poder

La reforma fiscal en México sigue siendo un pendiente histórico que se desdibuja

en el tiempo, como una sombra esquiva que los poderes económicos y políticos se empeñan en no enfrentar.

En 2025, el país recauda apenas el 13.1% del Producto Interno Bruto en impuestos, una de las tasas más bajas de América Latina, mientras el 10% más rico concentra más del 60% de la riqueza nacional.

En la Cámara de Diputados, se ha retomado la discusión pública, pero sin que exista hasta ahora una propuesta formal que desafíe el statu quo.

Así, la reforma fiscal vuelve a quedar atrapada entre la urgencia del reclamo social y las élites, que prefieren mantener intacto un sistema que perpetúa la desigualdad y protege sus privilegios.

¿Por qué en México nadie —ni el PRI del aparato, ni el PAN empresarial, ni Morena con su mandato social— ha querido emprender una auténtica reforma fiscal? La respuesta no es técnica. Es política.

Gravar grandes fortunas, tocar los ingresos del capital o reducir privilegios fiscales implica confrontar al verdadero poder: el económico.

Por eso, aquí, los partidos gobiernan sin transformar. Lo fiscal, como lo político, se administra, pero no se reforma.

Como decía Octavio Paz: “en México el poder no se transforma, se sustituye”.

Lo cierto es que la urgencia de una reforma fiscal no es nueva. Desde hace más de medio siglo, cada generación de políticos ha prometido enfrentar el reto.

Y todos, sin excepción, han retrocedido. En el fondo, pareciera existir un pacto tácito: preservar la desigualdad como piedra angular del modelo fiscal.

En 1961, el presidente Adolfo López Mateos encargó al economista Nicholas Kaldor un diagnóstico profundo del sistema tributario mexicano.

La propuesta del británico era clara y ambiciosa: gravar las grandes riquezas, fortalecer el impuesto a las utilidades empresariales y reducir la dependencia del petróleo.

Pero la reacción fue fría. Antonio Ortiz Mena, entonces secretario de Hacienda, lo consideró inaplicable “en el contexto mexicano”.

Aquel rechazo reveló una constante que se ha repetido por décadas: toda propuesta que toque intereses económicos es archivada sin discusión.

Desde entonces, la negación ha sido la norma. Carlos Salinas de Gortari impulsó la apertura económica, pero mantuvo intacta la arquitectura fiscal que favorece a los poderosos.

Zedillo creó el SAT y tecnificó la recaudación, pero evitó tocar los esquemas de elusión utilizados por grandes consorcios.

Fox habló de modernización, pero huyó ante la sola mención del IVA en alimentos y medicinas.

Calderón impuso gravámenes temporales que se extinguieron con su mandato.

Peña Nieto, en el marco del “Pacto por México”, presentó una reforma burocrática, sin tocar los pilares de la desigualdad fiscal. Y luego vino la Cuarta Transformación.

Con el respaldo mayoritario del Congreso y un apoyo popular sin precedentes, Morena y el presidente López Obrador decidieron no mover una sola pieza del sistema tri-



butario. Nada de nuevos impuestos, nada de incrementos. Nada que incomodara al sector empresarial.

En lugar de una reforma estructural, optaron por un enfoque moralista: cobrar deudas antiguas, cerrar fugas, combatir la corrupción dentro del SAT. Pero la raíz del problema quedó intacta.

La gran pregunta es por qué, sexenio tras sexenio, gobierno tras gobierno, se protege el mismo esquema fiscal. La respuesta es incómoda: porque cambiarlo implica redistribuir poder. Y el poder, en México, no se toca. Una reforma fiscal auténtica no se limita a cifras; trastoca relaciones, contratos implícitos, pactos de impunidad.

No es solo cobrar más: es cuestionar quién manda y por qué. El Estado mexicano ha construido una política social que depende de un sistema tributario frágil, inequitativo y profundamente regresivo.

Pretende redistribuir sin recaudar, y eso, a la larga, es insostenible.

Mientras no se rompa ese círculo, el gobierno seguirá dependiendo del azar petrolero, de ingresos extraordinarios, o del voluntarismo fiscal.

La reforma fiscal es, en el fondo, una confesión postergada: todos saben que es necesaria, pero nadie quiere firmarla.

Cada intento termina reflejando no el rostro del país que queremos, sino las fracturas de un sistema que se niega a cambiar.

Mientras lo fiscal no sea político, y lo político no implique redistribuir el ingreso y el poder, México seguirá siendo un país que administra carencias, pero que ante todo no cambia.

*pcdmx2025@proton.me

La gran pregunta es por qué, sexenio tras sexenio, gobierno tras gobierno, se protege el mismo esquema fiscal. La respuesta es incómoda: porque cambiarlo implica redistribuir poder. Y el poder, en México, no se toca. Una reforma fiscal auténtica no se limita a cifras; trastoca relaciones, contratos implícitos, pactos de impunidad



Foto Cuartoscuro